

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

#### AUDIENCIA DE TRÁMITE Y FALLO

El trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, se constituyó en audiencia con el fin de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **AMPARO DEL CARMEN TABARES JARAMILLO**, contra el **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL LIQUIDADO INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**, (en adelante PAR ISS), administrado por **FIDUAGRARIA S.A.**, y contra el **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-002-2016-00134-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que se declare que entre ella y el liquidado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, existió un contrato de trabajo el que termino sin justa causa y que como consecuencia se condene a las demandadas al pago de indemnización por despido injusto, reajuste de cesantías y sus intereses y a la indemnización moratoria del Decreto 797 de 1949.

Como fundamentos de hecho de sus pretensiones relata la actora, que estuvo vinculada laboralmente al liquidado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entre el 8 de septiembre de 2004 y el 31 de marzo de 2015, fecha esta última en la que la entidad demandada de manera unilateral decidió dar por terminado el contrato de trabajo en razón a la culminación de la liquidación del ISS, pero pese a ello no le fue

pagada la indemnización por despido prevista en el artículo 5 de la Convención colectiva suscrita por el ISS con SINTRASEGURIDADSOCIAL.

Afirma que el 21 de septiembre de 2015 solicitó la indemnización por despido, petición que fue resuelta de manera negativa el 1º de octubre de 2015 aduciéndose que la terminación del contrato no fue injusta pues se amparo en el reconocimiento de la pensión de vejez.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.**

La *a quo* despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, absolviendo a las demandadas de las pretensiones instauradas en su contra argumentando básicamente que la terminación de la relación laboral con la demandante lo fue la liquidación del ISS, pero también el reconocimiento de la pensión de vejez como se lee en la carta de terminación del contrato.

Adujo la juez, que la intención es clara al decirse que al día siguiente no había entidad por la extinción, pero también que al día siguiente disfrutaría de su pensión de vejez, y por ello se dieron dos situaciones, la terminación del vínculo y la inclusión en nómina de pensionados sin solución de continuidad.

Indicó además que, la liquidación de la entidad a pesar de ser una causa legal según la jurisprudencia no es justa para dar por terminado el contrato de trabajo, sin embargo, conforme a al artículo 13 de la Ley 797 de 2003 el reconocimiento de la pensión de vejez si lo es y como en este caso esa fue una de las causales esgrimidas y demostradas, así como la efectiva inclusión en nómina de pensionados de la demandante, el despido del que fue objeto resulta legal y justo.

## **3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN.**

La sentencia fue apelada por la demandante, argumentando primeramente que dentro de la carta de terminación del contrato de trabajo no se invocó como justa causa el reconocimiento de la pensión de vejez. Dentro de esa carta se indicó en el primer párrafo que la terminación del contrato de trabajo se daba por la liquidación de la entidad el 31 de marzo de 2015 y en el segundo párrafo de la carta se hace alusión a la pensión de vejez pero como un tema informativo, sobre la expresión no

puede entenderse que esta era una causa de terminación del contrato si no que era un asunto que se aprovechaba en ese acto administrativo para comentar, e incluso dentro de la carta hay una expresión textual en donde dice: también aprovecho para brindarle la información relevante a su situación pensional.

Es así como no puede decirse que la terminación del vínculo pensional se dio por el reconocimiento de la pensión sino por la liquidación de la entidad, el querer del empleador fue terminar el vínculo por esta razón, no puede hablarse ahora de que la voluntad fue distinta y que fue por la pensión de vejez y conforme a la jurisprudencia no pueden alegarse nuevos hechos.

Respecto a la estabilidad laboral dentro del artículo 5 de la convención colectiva suscrita en el Seguros Social y SINTRASEGURIDADSOCIAL se indicó que los trabajadores del ISS no pueden ser despedidos sin justa causa, allí se indica que no hay lugar a indemnización solamente cuando se reestablece el trabajo o en atención a una sanción disciplinaria.

En este caso no hay impedimento para la indemnización por despido aun si el despido se hubiere producido por el reconocimiento de la pensión de vejez le asistía derecho al reconocimiento de la indemnización del acuerdo al artículo 23 del Decreto 2013 de 2012.

Por otro lado, la demandante no se acogió al plan de retiro voluntario por lo tanto, y de acuerdo al artículo 25 del Decreto 2013 de 2021 tenía derecho al reconocimiento de la indemnización, porque es claro que la norma indica que para que proceda el contrato de trabajo tenía que haber terminado unilateralmente y como consecuencia de la supresión o liquidación del ISS y que el contrato tenía que haber terminado sin que se acogiera el trabajador al plan de retiro voluntario como ocurre con la demandante por lo que tiene derecho a esa indemnización.

Finalmente indica que debe hacer alusión a la notificación de la pensión, que solo se dio el 17 de abril de 2015, es decir después de terminado el contrato de trabajo. De acuerdo con lo estipulado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003 esa notificación debe ser previa, no puede justificarse la terminación en una pensión que aún no había sido notificada a la demandante, no es un argumento que podía usar la entidad cuando la desconocía la trabajadora.

Que, en lo concerniente a la absolución de la indemnización moratoria, la buena fe patronal no fue demostrada porque en primer lugar no existió motivo razonable que justificara la falta de pago de la indemnización por despido sin justa causa cuando la demandada acepta que la causa de la terminación del contrato de trabajo fue la liquidación de ISS y después alegue otra causa.

#### **4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, la apoderada judicial del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, presentaron oportunamente escrito de alegación, en los siguientes términos:

“EI MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO argumenta resumidamente en los alegatos que las consideraciones fácticas y jurídicas acreditadas en el presente trámite judicial no evidencian los elementos suficientes para acreditar la procedencia de lo solicitado por la demandante, dado que tal y como se encuentra probado al interior del proceso, a la demandante le fueron liquidados oportunamente las prestaciones derivadas de la finalización del vínculo laboral, sin que pueda afirmarse la existencia de incumplimiento alguno, siendo improcedente la solicitud indemnizatoria por despido sin justa causa, tal y como lo dispuso el A quo en la sentencia proferida el 05 de marzo de 2019.

El proceso de liquidación del ISS se adelantó de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, por lo tanto, las reclamaciones patrimoniales y económicas realizadas ante el liquidador integran los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, exigibles judicialmente por el reconocimiento en el proceso de liquidación, sin que sea esta la situación administrativa que justifique la integración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se advierte que entre FIDUAGRARIA S.A. y el apoderado General de Fiduciaria La Previsora S.A., entidad Liquidadora del ISS en Liquidación se suscribió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 015-2015, cuyo objeto es la constitución de un Patrimonio Autónomo de Remanentes destinado, entre otros a: “...(e) Efectuar el pago de las obligaciones remanentes y contingentes a cargo del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en el momento que se hagan exigibles, ...”.

El referido contrato en su Cláusula Tercera advierte que una vez se produzca el cierre del proceso liquidatorio y la extinción de la personería jurídica de la entidad en liquidación, el FIDEICOMITENTE será el MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es GARANTE de ninguna OBLIGACIÓN que se genere o se haya generado en virtud de la supuesta relación laboral entre la demandante y mi Representado, ni existe norma que imponga tal calidad.

Por consiguiente, solicita señores Magistrados se mantenga la negativa a las pretensiones de la demanda y la absolución a mi representada.”

## **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER**

El problema jurídico para resolver se circunscribe a si a la actora le fue terminado su contrato de trabajo de sin justa causa, que dé lugar al pago de indemnización por despido injusto y si de tener derecho a esta prestación hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria del Decreto 797 de 1949.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación y la consulta de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los Arts. 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

## **6. CONSIDERACIONES:**

Se conocerá el caso en virtud del recurso de apelación de la parte demandante atendiendo el principio de consonancia que establece el artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

Antes de entrar a estudiar los asuntos de controversia, se ha de manifestar que con la copia de la resolución 8584 de 11 de marzo de 2015 que milita a folios 28 y 29 y el acta de liquidación de prestaciones finales de la actora, de folio 30 parte integrante de la citada resolución, se prueba que la demandante laboró en el extinto Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) entre el 8 de septiembre de 2004 y el 31 de marzo de 2015, pues así se anota en la referida resolución,

Igualmente, con la copia de la Resolución GNR 76874 de 13 de marzo de 2015 glosada a folios 32 y 36, se prueba que a la actora se le reconoció pensión de vejez con disfrute a partir del 1 de abril de 2015, resolución que conforme al acta de folio 31 fue notificada el 17 de abril de 2015.

Así también, con la copia de la Convención Colectiva de Trabajo (en adelante CCT) que milita a folios 40 a 75 con su constancia de depósito ante el Ministerio del Trabajo, se prueba que entre el liquidado ISS y el sindicato denominado SINTRASEGURIDADSOCIAL se celebró tal convención para la vigencia de los años 2001-2004 la que le era aplicable a todos los trabajadores oficiales del ISS conforme al Art. 3 de la misma.

Efectuadas las anteriores precisiones, se pasa a resolver la apelación de la parte demandante, la que asevera que la causa de la terminación de su contrato de trabajo fue la liquidación del ISS, lo cual conforme la jurisprudencia de la SCL de la H. Corte Suprema de Justicia, no es una justa causa para terminar el contrato de trabajo y por ella habría lugar a la indemnización por despido injusto.

Por su parte el PAR ISS, aduce en el documento que milita a folios 20 a 23, al dar respuesta a la petición de la demandante que la terminación de la relación laboral que fue virtud del reconocimiento de pensión de vejez, lo que conforme al parágrafo 3° del artículo 9° de la ley 797 de 2003, es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por lo que no habría lugar a la indemnización por despido injusto.

En el hecho 18 de la demanda la actora manifiesta que COLPENSIONES por solicitud del ISS EN LIQUIDACIÓN, le reconoció pensión de vejez, mediante la Resolución GNR 76854 de 13 de marzo de 2015, notificada el 17 de abril siguiente.

Pues bien, la terminación del contrato de trabajo es una situación que requiere un formalismo consistente en que el empleador le informe al trabajador la causa de la terminación de su contrato de trabajo, para que, a partir de ello, de presentarse controversia, el juez laboral pueda establecer si el motivo de la terminación del referido contrato constituye o no una justa causa para terminarlo.

Es de indicar que el parágrafo 3° del Artículo 9 de la Ley 797 de 2003, establece como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o relación legal o reglamentaria: *“que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los*

*requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones”*

Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1037 de 2003 con el condicionamiento de que: *“siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente”*.

De acuerdo con lo anterior, para que se configure una justa causa de despido del trabajador, además del reconocimiento de la pensión debe garantizarse la inclusión en nómina de pensionados, pues si llegare a faltar uno de los dos actos, previo a desvincular al trabajador, habrá un despido injusto y por ende, el trabajador tendrá derecho a una indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.

Sobre la interpretación de la norma que es objeto de debate, el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en sentencia SL2509 de 2017, estableció como notas distintivas, que: **(i)** *Se trata de una causal de terminación de los vínculos laborales de los trabajadores del sector privado y público. Por lo tanto, de esta causal puede hacer uso el Estado-empleador para finalizar la relación de trabajo de un servidor público, sea trabajador oficial o sea empleado público, y el empleador privado para finalizar el contrato laboral con su trabajador. (ii)* *El empleador puede hacer uso de esta causal cuando al trabajador le «sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones», aspecto que debe armonizarse con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia aditiva C – 1037 de 2003, que condicionó la exequibilidad del precepto en estudio en el entendido que «además de la notificación del reconocimiento de la pensión no se puede dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique [al trabajador] debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente». En consecuencia, no basta con la notificación del reconocimiento de la pensión, sino que es requisito sine qua non que el trabajador sea incluido en nómina, a fin de que no exista solución de continuidad entre la fecha de su retiro y aquella en la que empieza*

*a percibir la pensión. (iii) El vocablo «podrá» que utiliza la norma en sus incisos primero y segundo denota que el retiro del trabajador por reconocimiento de la pensión de vejez entraña una decisión discrecional del empleador. Con todo, no debe perderse de vista que en el caso de los servidores públicos no es posible «recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» (art. 128 C.N.). (iv) Es aceptable legalmente que el empleador solicite la pensión en nombre del trabajador, cuando quiera que este no lo haga dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Para tales efectos, el empleador cuenta con iniciativa para solicitar y tramitar en nombre de su trabajador la pensión”.*

En este caso, se aportó a folios 27 comunicado emitido por el ISS en liquidación fechado el 10 de marzo de 2015 mediante el cual se le informa a la actora primero, que dada la ampliación del término para la liquidación de la entidad hasta el 31 de marzo de 2015, la relación laboral terminaría en dicha fecha y segundo, que “*con oficio de fecha 04 de abril de 2015, el Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, informó de su reconocimiento pensional e ingreso a nomina, que será efectivo a partir del 01 de abril de 2015*”.

En la referida misiva se observa que, contrario a lo dicho por la demandante, se le *informa* que el término de liquidación del ISS se amplía hasta el 31 de marzo de 2015 y que por esa razón la relación laboral culmina en esa fecha y, en esas mismos términos, es decir, usando la palabra “informa”, se le indica que se le *reconoció la pensión con ingreso a nómina de 1º de abril de 2015*, es decir la palabra usada para exponer la terminación del contrato es “informa”, pero claramente la causal aducida además de la liquidación del IS, es el reconocimiento de la pensión de vejez lo cual coincide con el contenido de la Resolución GNR 76874 de 13 de marzo de 2015, por medio de la cual se le otorgó la pensión a la demandante, indicándose como fecha de **ingreso a nomina el mes de abril de 2015**, con pago en **mayo del mismo año**, (fls. 32 y 36), circunstancia que el liquidador de la entidad le puso en conocimiento por medio de comunicación del 10 de marzo de 2015 (fls. 27).

De lo anterior se evidencia que la intención clara del ISS en liquidación era dar por terminado el contrato de la demandante además de la liquidación del ISS, por el



reconocimiento de la pensión y fue precisamente por tal razón, como lo confiesa la actora en la demandada, que el ISS solicitó la pensión a favor de ella y de manera diligente coordinó la terminación del contrato por la liquidación de la entidad y el ingreso a nómina de la accionante con el ánimo de no afectar su mínimo vital, y exponerle en esa misma carta de terminación se reconocimiento pensional, luego no puede catalogarse el despido como ilegal e injusto, al estar regulado el reconocimiento de la prestación como causal de despido y haber actuado la entidad con la diligencia a fin de que se le reconociera la prestación y la inclusión en nómina fuese concomitante con la fecha en la que se dio por liquidada la entidad, sin que pueda predicarse como lo manifiesta la apoderada recurrente que la demandante no tenía conocimiento del reconocimiento de la prestación, pues, el empleador le informó sobre el contenido del acto administrativo que le concedía la pensión, tal y como se lo manifestó a la demandante en la comunicación del 10 de marzo de 2015 y además se le incluyó en nómina de pensionados con disfrute desde el día siguiente a la terminación del contrato, cumpliéndose así con lo importante en estos asuntos que lo es la continuidad de los ingresos del trabajador que garantice su derecho al mínimo vital, lo que está probado en razón de su inclusión en nómina de pensionados.

Al respecto la Corte Suprema de justicia en la sentencia SL 16954 de 2017, de la manifestó con relación a la notificación del acto administrativo de reconocimiento de la pensión lo siguiente:

*“Al respecto estima la Sala que la simple formalidad de la notificación no es lo relevante en estos asuntos, ya que lo importante es que se garantice la continuidad de los ingresos del trabajador, lo que en criterio de la Sala está probado en razón de su inclusión en nómina de pensionados, debiendo además destacarse que la empresa fue lo suficientemente cuidadosa para coordinar con la debida anticipación su decisión de despido con el acto de inclusión en nómina de pensionados, de tal forma que se le garantizara recibir los ingresos que le permitieran vivir dignamente.*

*/.../*

*“En consecuencia, resulta claro que lo relevante en estos casos es que se garantice la continuidad de los ingresos de la persona en su tránsito de condición de trabajador a pensionado, dicho en otras palabras, que no haya solución de continuidad entre la fecha de retiro del servicio y aquella en que empieza a percibir su mesada, lo cual se cumplió en el caso objeto de estudio”.*

Interpretaciones que son coincidentes con la emitida en el Radicado 34629 del 02 de

junio de 2009, reiterada en la SL3088-2014 donde se realizó un análisis cronológico del material probatorio para verificar en qué momento se había notificado el reconocimiento e inclusión en nómina del actor como su desvinculación laboral, y con sustento en la sentencia C-1037 de 2003 de la Corte Constitucional, y señaló:

*“La comunicación del despido no puede sujetarse a la regla que supone el Tribunal como la de notificación oficial y previa de la resolución de reconocimiento de pensión, si de manera **informal es necesario que tanto la empresa como la institución de seguridad social actúen al unísono, acordando informal el momento en que cada una de ellas va a obrar, para señalar el uno la fecha de terminación del contrato y la consecuente desafiliación como trabajador, y la segunda fijar la fecha de reconocimiento de la pensión asegurando que para ese momento va a estar desafiliado, y no se van a causar más cotizaciones, y así liquidar el derecho pensional teniendo en cuenta la última cotización**”.*

Tampoco son validos los argumentos de la demandante recurrente en cuanto a que el artículo 5 de la convención colectiva suscrita entre el extinto ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL establece la estabilidad laboral de los trabajadores del extinto ISS y que nadie puede ser despedido sin justa causa, pues en este caso hubo la justa causa, consistente en el reconocimiento de la pensión de vejez y su efectiva inclusión en nómina, evento en el cual no aplica la referida estabilidad. Por esta misma razón, debe considerarse que aunque el artículo 25 del Decreto 2013 de 2012 establece que: *“A los trabajadores oficiales a quienes se les termine unilateralmente el contrato de trabajo, y que no se hayan acogido al Plan de Retiro consensuado, como consecuencia de la supresión del Instituto de Seguros Sociales, se les reconocerá y pagará una indemnización, de conformidad con lo previsto en la Convención Colectiva vigente.”*, en este caso no procede la indemnización, pues existe norma legal que no puede ser desconocida, que establece como justa causa de terminación del contrato de trabajo, el reconocimiento de la prestación económica de vejez.

Consecuente con ello se confirmará la sentencia en cuanto absolvió de indemnización por despido injusto y en consecuencia no es procedente el estudio de la pretensión referente a la indemnización moratoria del Decreto 797 de 1949, pues esta se derivaba de la falta de pago de la indemnización por despido injusto.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de los demandados.

Las agencias en derecho conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$908.526, repartidos en parte iguales entre las demandadas.

## 7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 5 de marzo de 2019, proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente proceso ordinario laboral promovido por **AMPARO DEL CARMEN TABARES JARAMILLO** contra el **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL LIQUIDADO INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES** administrado por **FIDUAGRARIA S.A.**, el **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL** y el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de los demandados. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$908.526, repartidos en parte iguales entre las demandadas.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes intervinieron en la decisión.

Los magistrados,

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**

**JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ**

ORDINARIO LABORAL  
AMPARO DEL CARMEN TABARES JARAMILLO Vs PAR ISS- FIDUAGRARIA S.A., MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN  
SOCIAL y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.  
RADICADO: 05001-31-05-002-2016-00134,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° **061** del **14 DE ABRIL DE 2021**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley  
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0d0248da25a77827ccc230774b97f12cc8b9385575efb45b2e808c698beddc03**

Documento generado en 13/04/2021 02:34:52 PM